

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO DIECIOCHO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTÁ D.C.**

RADICACION: 1100140880182022007000
ACCIONANTE: ANGELA MILDREY DIAZ BORBON
ACCIONADO: DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION
DECIDE: TUTELA
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C., TRES (3) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

OBJETO A DECIDIR

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela impetrada por la señora **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON**, contra **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, habeas data y debido proceso.

1. ANTECEDENTES PROCESALES

1.1. Hechos jurídicamente relevantes.

Relató la ciudadana **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON** que el día 29 de septiembre de 2022, elevó derecho de petición ante **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, solicitando la corrección de la calificación de riesgo que afecte su historial crediticio y la actualización de su Score; sin embargo, afirmó que a la fecha de interponer la acción constitucional no ha obtenido respuesta alguna de parte de las accionadas.

En virtud de lo anterior, consideró vulnerados sus derechos fundamentales de petición, habeas data y debido proceso, en consecuencia, solicitó que en sede de tutela se ordene a las accionadas dar respuesta de fondo a su petición.

1.2. Tramite de la acción de tutela.

Mediante auto del pasado 26 de octubre, se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y se ordenó enterar a las accionadas **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, de los hechos narrados por la demandante, para que ejercieran su derecho a la defensa y contradicción.

1.3. Respuesta de la accionada DATACREDITO.

En escrito de contestación recibido vía correo electrónico, la accionada expuso que, mediante respuesta dada electrónicamente el 14 de octubre del 2022, EXPERIAN COLOMBIA S.A – DATACRÉDITO respondió de manera clara, completa, pertinente y oportuna el derecho de petición radicado por la parte accionante. Agregó, que la respuesta se remitió a la dirección electrónica de notificación expuesta por la parte accionante en su derecho de petición, esto es, solucioneslegales@gmail.com, para lo cual adjuntó copia de la réplica enviada a la petente y constancia de comunicación.

En virtud de lo anterior, solicito se deniegue la acción constitucional, pues esa entidad cumplió con su deber de responder la petición de la parte accionante en los términos establecidos en la Ley 1266 de 2008.

1.4. Respuesta de la accionada CIFIN-TRANSUNION.

A través de respuesta recibida vía correo electrónico, la demandada señaló que, pese a no haber recibido la petición por ningún canal autorizado, al tener conocimiento de la petición a través de la acción de tutela, esa entidad, dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición presentado por la accionante de fecha 30 de septiembre de 2022 con documento de fecha 28 de octubre de 2022 y remitido al correo electrónico solucioneslegales20@gmail.com, lo que implica que no puede haber vulneración de derecho fundamental alguno.

Por lo anterior, solicito se desestimen las pretensiones de la accionante negando el amparo solicitado. Agregó que, de concederse total o parcialmente el amparo deprecado, las ordenes sean dadas a la fuente de la información, para que esta efectúe las modificaciones que fije el despacho y así se lo informe al operador para proceder de conformidad.

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

2.1. Competencia.

El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, desarrollado por los numerales 1 de los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, al unísono prevén:

"Artículo 1°. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza

que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

*1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y **contra particulares**, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales."*

En consecuencia, este Juzgado es competente para tramitar y resolver la demanda de tutela de la referencia, por cuanto la misma se dirige en contra de **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, entidades de carácter privado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela.

Corresponde al Despacho determinar si en el caso planteado por la demandante se configura una vulneración o amenaza al derecho fundamental de petición, por la falta de respuesta a la solicitud impetrada por la actora, o si, por el contrario, de conformidad con lo dado a conocer por las entidades demandadas, nos encontramos frente a un hecho superado. Para ello, se analizará el caso en el marco de lo previsto por la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto.

2.3. Derecho de Petición.

La Constitución Política de 1991 en el artículo 23, consagra el derecho de petición y lo define como: *"El derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales"*.

Según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la **pronta** y **oportuna** resolución de la reclamación que se formula ante la autoridad pública hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. Además, la respuesta tiene que **comprender** y **resolver de fondo** lo pedido y ser **comunicada** al peticionario, pues de obviedad es entender que el derecho fundamental mencionado comporta para este último la posibilidad de conocer la respuesta de la entidad ante la cual se cursó la solicitud, una vez transcurrido el término establecido en la ley.

Sobre el particular, esa Corporación en Sentencia T-146 del 11 de marzo del 2012, luego de abordar el estudio de la línea jurisprudencial, estableció lo siguiente:

*"(...) el ejercicio de derecho de petición comienza con la posibilidad de dirigirse respetuosamente a las autoridades, tal y como lo señala el **primer enunciado normativo** del artículo 23 cuando señala que **'Todo (sic) persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general (...)**'.*

*Esta solicitud desencadena la actuación correspondiente, esto es, que dentro de un término razonable, se profiera una decisión de fondo, la cual constituye **un segundo elemento integrado** a la noción del derecho que el artículo 23 superior recoge- "y **a obtener pronta resolución**"-.*

*Además, **como tercer enunciado**, encontramos el segundo párrafo de la disposición constitucional que señala que la ley "podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales". Es decir, la reglamentación de estos tres elementos identifican e individualizan el derecho fundamental." (En negrilla en el texto original)*

Por otra parte, como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, esta Corporación sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes términos:

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. (Se subraya)

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si

la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes". (Subrayado y Negrilla del Despacho).

Así mismo, el artículo 14º del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¹ se encarga de regular el procedimiento y los plazos para garantizar el derecho de petición en sus diferentes modalidades, para lo cual preceptúa:

ARTÍCULO 14. PLAZO PARA DECIDIR. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.*

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. *Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los **diez (10) siguientes a su recepción.** Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregaran dentro de los tres (3) días siguientes.*

2. *Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del termino señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

¹ Sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Como quiera que en el caso bajo estudio se indicó por parte de las accionadas que dieron respuesta a la solicitud impetrada por la ciudadana **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON**, a partir de la cual predica la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, es imperioso entrar a determinar si nos encontramos bajo la figura de "hecho superado".

2.4. Del hecho superado.

El fin de la acción de tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, en esa medida cuando en el transcurso del trámite constitucional, el derecho cuya protección se solicita deja de estar en peligro o cesa su vulneración, el juez de tutela debe abstenerse de emitir la orden de protección solicitada.

En las condiciones previstas, la Corte Constitucional reconoce la existencia de un hecho superado y autoriza al juez de tutela para negar la protección, sobre la base de que cualquier orden que se imparta para ofrecer el amparo requerido es inocua. Sobre el caso en particular la Corte Constitucional ha dicho:

"(...) De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se han diferenciado tres criterios para determinar si ha acaecido o no el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, a saber: (i) que con anterioridad a la acción de tutela exista una vulneración o amenaza a un derecho fundamental del accionante, cuya protección sea posteriormente solicitada; (ii) que durante el trámite de la acción de tutela haya cesado la vulneración o amenaza del derecho, y; (iii) que si la acción pretende el suministro de una prestación y, "dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta [advierte la Sala, siempre y cuando no corresponda al cumplimiento de una orden del juez de tutela], también se puede considerar que existe un hecho superado".

De esta manera, cuando se encuentre probada alguna de estas circunstancias, el juez constitucional tiene el deber de declarar la carencia actual de objeto. De lo contrario, las decisiones y órdenes carecerían de sentido ante "la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor".

2.5. Caso Concreto.

En atención a los supuestos de hecho narrados en el libelo de tutela, corresponde a este Despacho determinar si las entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental de petición a la ciudadana **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON**.

² Sentencia T-076-2019

De la documentación allegada al trámite constitucional, se acreditó que, en efecto, el día 30 de septiembre de 2022 la señora **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON** elevó petición ante **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, solicitando la corrección de la calificación de riesgo que afecta su historial crediticio y la actualización de su Score, solicitud que afirma la accionante a la fecha de interponer la acción constitucional no ha obtenido respuesta alguna de parte de las demandadas.

A pesar de lo anterior, durante el presente trámite, las entidades demandadas informaron que dieron contestación a la petición de la actora. En efecto, al respecto **DATACREDITO**, señaló que mediante respuesta dada electrónicamente el 14 de octubre del 2022, esa entidad respondió de manera clara, completa, pertinente y oportuna el derecho de petición radicado por la accionante, la cual se remitió a la dirección electrónica de notificación expuesta por aquella en su derecho de petición, esto es, solucioneslegales@gmail.com, para lo cual allegó copia de la réplica enviada a la accionante y constancia de envío de dicha comunicación.

Por su parte **CIFIN-TRANSUNION**, señaló que, pese a no haber recibido la petición por ningún canal autorizado, al tener conocimiento de la petición a través de la acción de tutela, esa entidad, el día 28 de octubre de 2022 dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición presentado por la accionante. Agregó, que dicha replica fue remitida al correo electrónico solucioneslegales20@gmail.com, adjuntando copia de la contestación enviada a la petente y soporte de la notificación de la misma.

De manera que se supera la presunta transgresión puesta de presente a través de este mecanismo constitucional, pues si bien la señora **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON** señaló que la solicitud elevada el día 30 de septiembre de 2022, no había sido resuelta por las entidades demandadas dentro del término legal, también lo es que, durante el trámite de la presente acción constitucional las accionadas acreditaron que realizaron lo pertinente para atenderla en los términos planteados por la peticionaria.

En efecto, observado el contenido de los escritos de respuesta de fechas 14 y 28 de octubre hogaño que se emitieron por parte de las accionadas **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, respectivamente, cuyo texto se transcribió y se halla adjunto a la réplica que ofrecieron las demandadas al Juzgado, se evidencia que es una respuesta clara, congruente y de fondo, en tanto guarda relación con lo pretendido por la parte actora y de contera resuelve lo planteado por la accionante.

Adicionalmente las demandadas acreditaron su notificación habida cuenta que la respuesta fue enviada a la dirección electrónica que informó la interesada, lo que permite afirmar que se torna improcedente el amparo reclamado, en el entendido que su pretensión fue resuelta y cumple con los requisitos aludidos en el acápite de consideraciones, independientemente que ésta sea o no favorable a sus intereses.

Con relación a esta circunstancia, ha señalado la Corte Constitucional que:

"(...) si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela (...)"³

Corolario, es forzoso para esta falladora declarar infundada la protección reclamada en la demanda, pues la decisión que podría proferirse en esta instancia no tendría ninguna resonancia frente a la omisión de las entidades accionadas **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**, toda vez que se realizaron las acciones pertinentes para atender el derecho fundamental de petición invocado por la actora, y se libraron las comunicaciones respectivas, lo cual impone la aplicación de la hipótesis contenida en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991.

Finalmente, en relación con los derechos fundamentales al habeas data y debido proceso, invocados por la actora, basta señalar que no se acreditó durante el curso del trámite tutelar que las accionadas hayan incurrido en conductas atentatorias en contra de los mismos, razón por la cual se denegará su amparo.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DIECIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela impetrada por la ciudadana **ANGELA MILDREY DIAZ BORBON** en contra de **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior **DECLARAR IMPROCEDENTE** la acción de tutela.

TERCERO: DESVINCULAR del trámite de la acción constitucional a **DATACREDITO Y CIFIN-TRANSUNION**.

³ Corte Constitucional. Sentencia. T-519 de 2012.

CUARTO: NOTIFICAR, el fallo en los términos señalados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no impugnarse el presente fallo, al día siguiente del vencimiento del término para ello, **REMITIR** la actuación original de este expediente de tutela a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión (Inciso 2º art. 31, Decreto 2591 de 1991).

Contra esta decisión procede el recurso de impugnación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**LILIANA PATRICIA BERNAL MORENO
JUEZ**

Firmado Por:

Liliana Patricia Bernal Moreno

Juez

Juzgado Municipal

Penal 018 Control De Garantías

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **adfc3af7d9ce017be16b7cff073128199cf8379e9575276adb595deb9c457e04**

Documento generado en 04/11/2022 04:20:17 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**